JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO
Palmira, och0 (08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

A.I. Número **369**
Rad. 76 520 31 03 004 2022 000204 00
Verbal

ASUNTO

Entra el Despacho a resolver el recurso de reposición formulado por el apoderado judicial de la parte demandante contra el auto de trámite número 266 fechado 2 de octubre de 2023, proferido dentro del presente asunto, pero previo a ello y dado que se invoca por parte del mandatario demandante el acaecimiento de la pérdida de competencia por parte de la instancia, se determinará delantadamente si hay lugar a su declaración, a lo cual se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Previo el inicio de los razonamientos necesarios para resolver lo pedido, cabe recordarle a los intervinientes que, es responsabilidad de las partes y de sus apoderados proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, así como obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales, presumiéndose al tenor del artículo 79 del Código General del Proceso que ha existido tal comportamiento en el interviniente, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, así como cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.

Establecido lo anterior y del preliminar examen practicado al plenario con ocasión de la reciente petición formulada por el apoderado inconforme, se observa que la instancia como autoridad a cuyo cargo se encuentra el trámite del proceso adelantado en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil por haberlo avocado, profirió auto admisorio de la demanda el día 9 de febrero de 2023,¹ el cual se notificó con inserción en estados del día siguiente,² es decir 25 días después de presentada la demanda,³ con lo cual queda acreditado plenamente que se cumplió con el plazo fijado en el artículo 90 del Código General del Proceso y por ello, resulta infundado, pretender que la oportunidad prevista para efectos de la pérdida de competencia, se compute desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda, ello bajo el indiscutible precepto adjetivo según el cual, ***“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado”***

Bastará para concluir lo concerniente a la convalidación de lo actuado y de paso lo referente a la incólume competencia para conocer, tramitar y decidir el presente asunto, sostener que carece de asidero sustentar como lo hace el profesional del derecho una presunta pérdida de competencia en aplicación del artículo 121 procesal, pues para ello menester resulta que, acaezca indefectiblemente la notificación del extremo pasivo, etapa que según lo decidido en precedente oportunidad, no se ha surtido en debida forma, y en gracia de discusión, esto es que cumpliera con las exigencias enrostradas en su momento, las cuales se verificaran a continuación, cabe recordarle al solicitante, que esta se intentó el 29 de agosto del año inmediatamente anterior y que solo han transcurrido desde ese momento algo más de ocho (08) meses y no el año previsto por el legislador, oportunidad que incluso puede prorrogarse de manera excepcional por seis meses más, de ahí que emerge precipitado y contrario a derecho lo pretendido por el mandatario, razón por la que se denegará lo pedido.

¹ Ver archivo 04 del expediente digital.

² Ver archivos 05 y 06 del expediente digital.

³ Ver archivo 02 del expediente digital

Para resolver el recurso de reposición impetrado, se advierte al verificar los fundamentos de la providencia cuestionada, mediante la cual se adoptó como medida de saneamiento agregar sin anotación alguna la diligencia de notificación personal en forma electrónica surtida por el apoderado de la parte demandante, en ejercicio de las practicas judiciales direccionadas a un sistema proteccionista de las garantías procesales fundamentales, que se recalcó recientemente en un pronunciamiento por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, en un asunto de conocimiento de este Juzgado, que si bien la decisión se encuentra ajustada a derecho, a partir de los cargos imputados por el profesional del derecho por vía de reposición, se pudo evidenciar además del fundamento expresado para no acceder a tener como válido el acto procesal en mientes, habida cuenta no brindó certeza en su efectividad, si fue concluyente la desatención a los requisitos previstos al momento de aplicar el artículo 8 de la ley 2213 de 2022 y que fueron incluso expresamente destacados desde la admisión de la demanda, esto es cumplir con la imposición de *“...afirmar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la demandada, informar también la forma como la obtuvo y allegar las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.”*⁴

Como quiera que en la demanda se expresó por la inconforme con relación a la ubicación de la pasiva: *“mi mandante manifiesta que desconoce la dirección de correo electrónico de la demandada”*, bastará entonces para desestimar los reparos que con ocasión de las exigencias formales le fueron enrostrados al memorialista en relación al mensaje de datos, indicar que sólo ante la ausencia de la manifestación bajo la gravedad de juramento basta para afincar lo dispuesto, recordar lo que al respecto, el órgano de cierre en materia constitucional consignó en la sentencia T-543 de 1993 al referir que: *“Si la disposición legal exige la formalidad del juramento por la trascendencia del acto que se realiza, en principio ésta exigencia debe cumplirse a cabalidad, a menos que la persona llamada a prestar juramento no pueda realizarlo porque tiene argumentos razonables para formular una objeción de conciencia que exigen la cohabitación de dos derechos fundamentales, uno, la libertad de conciencia y otro, el debido proceso que debe observarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas.”*

Si bien es cierto la corporación en cita, al analizar el caso concreto estipuló que la exigencia formal de la manifestación expresa del juramento, podría suplirse utilizando otra palabra similar que contenga el valor suficiente para que en caso de ser contrario a la verdad lo manifestado, la persona pueda verse comprometida en los delitos contra la administración de justicia consagrados en el ordenamiento penal, en aquellos casos donde su conciencia se lo impida, no se evidenció en la actuación objeto de saneamiento, la existencia de tal circunstancia, habida cuenta, se limitó la memorialista sin mayores detalles a incorporar la diligencia por ella adelantada.

Así las cosas y al no estar atendido integralmente el requisito formal advertido desde la admisión de la demanda, consecuente resultaba que la actuación no fuera tenida en cuenta, ello sin contar que no habiendo comparecido la demanda para convalidar cualquier anomalía, no puede tenerse la misma como saneada.

Así las cosas y siendo que también la Corte Constitucional ha puesto de manifiesto la trascendencia que reviste el acto procesal objeto de análisis, destacando que

“...[l]a notificación personal busca asegurar el derecho de defensa, ya que al dar carácter obligatorio a este tipo de actuación procesal, se está garantizando que sea directamente aquel cuyo derecho o interés resulta afectado, o quien lleva su representación, el que se imponga con plena certidumbre acerca del contenido de providencias trascendentales en el curso del proceso. Se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales

⁴ Ver numeral 2 del auto 759 del 31 de octubre de 2022.

con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. Este acto procesal también desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales...⁵,

necesario resultara mantener la decisión objeto de recurso.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira, sin más consideraciones de orden legal, **RESUELVE:**

- 1.- No acceder a la solicitud de pérdida de competencia elevada por el apoderado de la demandante.
2. MANTENER la decisión objeto de recurso de reposición, por las razones esbozadas en la parte motiva del proveído.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Firmado Por:
Henry Pizo Echavarría
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 004
Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ec7693d1b3e3c8ee3b913324272f195fe25034fd868b6de0aaf305ebba242ff**

Documento generado en 08/05/2024 02:37:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

⁵ Sentencia C-472 de 1992, Magistrado Ponente, doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO